

Resolución de la Presidencia Federal de Izquierda Unida

de 13 de enero de 2003

*(Aprobada por unanimidad)*

## **NO A LA GUERRA CONTRA IRAK**

## **DEFENDAMOS LA PAZ**

La dinámica de guerra en curso, donde nunca como en otros momentos fue tan clara la voluntad de imponer con las armas el dominio económico mundial, ofrece el rostro real del actual modelo de globalización. A las exigencias políticas y sociales de alterar la marcha del proceso de mundialización neoliberal y transformarlo en un proyecto de ciudadanía mundial, sólo se ha encontrado respuesta en forma de discursos institucionales que han pretendido enmascarar la verdad última de un proceso intrínsecamente injusto.

De un proceso que ha incrementado las desigualdades y asimetrías en todos los órdenes, que ha hundido en la miseria a zonas enteras del planeta y las han expulsado de la vida, no podía esperarse sino que fuera sostenido por la fuerza. Especialmente cuando, a pesar de todos los intentos de criminalización, los sectores opuestos a esta lógica guerrera, excluyente, insolidaria e inhumana crecen en todos los rincones del planeta.

La globalización económica ha sido acompañada de un proceso de **creación de un Estado de excepción internacional** que ha suspendido el derecho internacional y ha declarado unilateralmente la preeminencia de Estados Unidos para resolver aquellos problemas que ellos consideran como prioritarios.

La contestación a esta preeminencia unilateral y a esta suspensión del derecho internacional está siendo contestada en todo el mundo y también en Estados Unidos. Sorprende saber que a pesar de la continuada propaganda la administración Bush cada vez convence a menos de sus ciudadanos.

Este rechazo y contestación se repite en mayor grado en Europa. Merece la pena destacar el incremento de ese rechazo en Gran Bretaña y su mantenimiento en altísimos porcentajes en España. **Es evidente que la guerra no es ni legal ni legítima.**

Por otra parte, hoy vivimos el momento en que las promesas realizadas por los organismos financieros internacionales sobre la utilidad económica de las políticas adscritas al “Consenso de Washington” han fracasado. Si bien pudieron mostrar en algunos momentos, índices aceptables sobre contención de la hiperinflación, el coste social de esas políticas ya había producido importantes movimientos de contestación y protesta social.

La crisis en Argentina fue una señal inequívoca de que esas políticas sumían a los países que las practicaban en la pobreza y condicionaban severamente sus posibilidades de desarrollo ulterior. Toda vez que un eje central era la privatización de activos estatales para pagar deuda externa, los países se condenaban a depender de la financiación exterior en todos los órdenes. Ahora ya sabemos las consecuencias.

Pero por lo que parece la derecha no encuentra otro modo de seguir asegurando sus privilegios más que mediante la profundización de estas políticas. Y en las actuales condiciones eso implica enseñar el músculo para demostrar que lo que se haga guardando las formalidades será impuesto de una u otra manera si la protesta arrecia.

La crisis del actual modelo de globalización se ha hecho manifiesta en América Latina, aunque ya tuvimos señales evidentes a mediados de los noventa con la crisis de los tigres asiáticos.

Lo que ofrece una nueva perspectiva de esta crisis es que la representación política de las políticas neoliberales en el continente latinoamericano está sufriendo importantes retrocesos y derrotas electorales. Junto a esto habría que señalar la irrupción política del indigenismo como un sujeto político con un perfil claramente antineoliberal y transformador.

La victoria de Lula y sus primeros pasos como presidente de Brasil ofrecen un panorama esperanzador respecto a las posibilidades de otras políticas económicas y sociales, desde los proyectos “Hambre Cero” y “Primer Empleo” hasta la Reforma Agraria pacífica y planificada, pasando por la lucha contra la corrupción y la construcción política, económica y social de América Latina, incluyendo a países como Cuba, Ecuador y Venezuela. **Desde Izquierda Unida hemos sentido como propia esta victoria y la consideramos como una señal más de que se ha abierto un nuevo ciclo político que hace más creíble la crítica al doctrinarismo neoliberal y más legítimas también las opciones alternativas.**

Las constricciones y limitaciones que este ciclo político va a encontrarse vienen ejemplificadas por el caso venezolano. Cualquier giro hacia políticas con mayor sensibilidad social que cuestionen el desigual reparto de la riqueza significará de inmediato la confrontación social, y el apoyo y la complicidad de Estados Unidos con los intereses de las minorías más privilegiadas. Ningún gobierno permanecerá a salvo de esa presión y esto resulta algo sabido y conocido por todos. **Desde Izquierda Unida, reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso político con la legalidad constitucional venezolana y denunciemos la estrategia golpista de una oposición minoritaria, instigada por la Administración Bush y apoyada desde España por el Partido Popular y por determinados intereses empresariales.**

## **Los vientos de guerra**

Por eso y pese a la improvisación con que parece que el concepto “eje del mal” fue formulado, la lógica de la guerra no es extraña a este momento del proceso ni está desprovista de una racionalidad funcional a la globalización en curso.

Una vez que la economía está en crisis y que cada vez más voces se levantan impugnando radicalmente las políticas globalizadoras, Estados Unidos, con la excusa del 11-S y la complicidad de muchos otros estados ha decidido hacer saber al resto de países que posee la fuerza económica y militar para imponer sus criterios en cualquier parte del planeta. Una fuerza que, afirman, les da derecho a modificar la agenda política en los diferentes estados. En el reparto de papeles, Estados Unidos pone la fuerza y las capacidades militares, y el resto de estados que le apoyan su legitimidad democrática para tratar de neutralizar a sus opiniones públicas que a fecha de hoy son o contrarias o escépticas frente a la invasión de Irak.

En este último período vivimos con una cierta expectativa el rechazo contundente de Francia y Alemania a la guerra en Irak que parece reivindicar un papel especial de la Unión Europea en el concierto internacional. Llama la atención el compromiso total del gobierno Aznar con Estados Unidos y su desvinculación de la construcción europea en este punto.

La pretensión de Aznar de convertirse en el Blair latino nos convierte en un elemento inservible en el ámbito internacional. El gobierno del PP está malgastando el patrimonio que por razones históricas y culturales hubieran permitido que España jugara un papel más activo y protagonista en la esfera internacional.

En las actuales condiciones de desigualdad y crisis, Estados Unidos prefiere no sujetarse a ningún orden ni organización que limite o pueda limitar sus actividades. Sólo los apoyos incondicionales son considerados y oídos.

Hay un elemento significativo más que no debe ser despreciado: la voluntad de Estados Unidos de controlar la producción y el suministro de petróleo en las próximas décadas. El presidente Bush acompañó este deseo indecente de la

publicidad de su acción bélica y de la voluntad de tener muy en cuenta a aquellos que le hubieran apoyado en el futuro reparto de prebendas petrolíferas.

Desde nuestra perspectiva la actual y previsible guerra contra Irak es una guerra terrorista que hará cómplices de terrorismo a los estados que la apoyen. La ciudadanía estará atenta a la posición de España en el Consejo de Seguridad, del que es miembro no permanente desde el 1º de enero, tanto en relación con la guerra como en la cuestión del referéndum de autodeterminación del Sahara Occidental.

El Gobierno Aznar no puede involucrar a España en la guerra, comprometiendo a las Fuerzas Armadas o autorizando a EE.UU a utilizar las bases militares de Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza, sin que antes se produzca un debate y un pronunciamiento del Congreso de los Diputados, máxime cuando todas las encuestas indican el rechazo mayoritario de la ciudadanía a esta guerra. La negativa de Aznar y del PP a convocar al Parlamento para abordar esta cuestión sólo puede ser interpretada como un rasgo más de ese autoritarismo político que significa la acción de la derecha extrema en el continente europeo.

Por otra parte, parece cuando menos un despropósito esta vinculación sumisa del gobierno del PP con la administración Bush habida cuenta de la situación económica internacional y de su previsible impacto en nuestra economía.

En realidad no se han argumentado razones para desencadenar la guerra contra Irak. En prácticamente un mes los inspectores de Naciones Unidas no parecen haber encontrado nada que justifique la belicosidad americana e inglesa. Nada se sabe tampoco de las informaciones que Estados Unidos decía poseer y que ofrecerían pruebas inequívocas de la posesión por parte de Irak de armas de destrucción masiva. Cuando esa acusación pierda toda sustancia, Estados Unidos presentará su decisión, al margen de cualquier consenso internacional, de activar su máquina de guerra. Su condición de *soberano mundial* así se lo permite. Y de ahí que la soberanía popular se enfrente en todo el mundo a esa usurpación.

Es un sarcasmo intolerable que pretenda juzgar esta situación la potencia que es hoy la principal amenaza para la paz mundial y su estabilidad económica, que ordena ejecuciones extrajudiciales selectivas y la compra de periodistas en el extranjero, y

que en los últimos años se ha desvinculado de importantes acuerdos internacionales. Es evidente que Estados Unidos no tiene la suficiente legitimidad moral ni política para imponer esta presión militar al resto de los países y menos aún para producir aún más daño y dolor al pueblo iraquí. A un gobierno, por cierto, que como en otros casos fue firme aliado suyo en algunos momentos de la muy reciente historia.

No es creíble el rol que EE.UU pretende desempeñar como abanderado del derecho internacional contra Irak cuando, al mismo tiempo, bloquea los planes de paz en el Próximo Oriente, aplazando el reconocimiento de un Estado palestino independiente y convirtiendo a los territorios palestinos en un campo de concentración.

Por otra parte, la presión militar puede producir una espiral de rearme a escala planetaria, incluido el rearme nuclear.

**Esta guerra terrorista merece un total y completo rechazo**. No es una acción de solidaridad con un gobierno autoritario y represor. **No se trata de un ejercicio maniqueo donde haya que optar por dos polos odiosos. Es un ejercicio de defensa del derecho internacional, de la libertad, de la democracia y contra las prácticas terroristas del gobierno de Estados Unidos y de quienes le apoyan, y, sobre todo, de apoyo a los pueblos que sufren siempre las decisiones de los poderosos.**

Pensamos que estamos ante un desafío que tendrá muy importantes consecuencias si finalmente la guerra se produce. Ya sabemos las intenciones de Estados Unidos y, entre otros, del gobierno español. Nos queda ahora preparar la respuesta de la sociedad civil en nuestro país y en toda Europa contra esta agresión sin límites que encabeza Estados Unidos.

## **Paremos la guerra antes de que empiece**

Desde IU queremos articular nuestra voluntad de sumar y encontrarnos con cuantos se opongan a esta guerra, y especialmente la juventud, con acciones propias que muestren de manera singularizada nuestro propio y específico perfil.

En este proceso queremos defender desde IU la oportunidad para congregar bajo los estandartes de la paz y el rechazo a la guerra a la más amplia coalición social y política posible. La expectativa de esta guerra ha producido un profundo escalofrío de temor y repudio en sectores muy amplios de la población que buscan expresar su rechazo si encuentra el modo. Necesitamos para esta campaña el mayor grado de tolerancia y de amplitud de miras en la búsqueda de iniciativas que puedan sumar a todos aquellos que están clara y decididamente contra la guerra.

Por otra parte, tenemos nuestra propia visión sobre el conflicto y debemos hacerla saber y conocer al conjunto de la población. Nuestro trabajo unitario debe y puede complementarse con un esfuerzo por difundir nuestra propia opinión sobre esta miserable guerra.

- ◆ En el ámbito social creemos que es imprescindible que la opinión difusa que hoy expresa su rechazo a la guerra encuentre formas de representar su desacuerdo. Todas las organizaciones de IU están llamadas a desplegar una acción de respuesta inmediata desde el mismo momento en que se produjera el inicio de la guerra. Pensamos en la necesidad de trabajar para asegurar el éxito de las iniciativas que se desarrollen de manera unitaria, desde la Marcha a Torrejón del 19 de enero y las movilizaciones del 15 de febrero, convocadas en toda Europa por el Foro Social de Florencia y el movimiento por otra globalización. y pensamos, también, en complementar esa movilización con otras expresiones de rechazo. Nos parece que una buena iniciativa sería la de impulsar una campaña: Balcones por la paz, que propusiese a la ciudadanía colgar en sus balcones pancartas contra la guerra y por la paz.

- ◆ Podemos proponer acciones claras de repudio si es que la guerra finalmente se desencadena, con mociones de rechazo y concentraciones en lugares emblemáticos.
- ◆ Es importante también todo aquello que seamos capaces de hacer desde nuestra presencia institucional: mociones en los ayuntamientos, desarrollo de actividades específicas, iniciativas parlamentarias etc..
- ◆ Y nos parece que una clave será el compromiso y participación del mayor número de afiliados y militantes. Proponemos desarrollar una campaña: **una acción contra la guerra por Asamblea de IU**. A nivel federal realizaremos un acto público en Madrid, en los primeros días de febrero.
- ◆ Considerando la importancia de este asunto y su centralidad para nuestra política, estas y otras actividades relacionadas con esta campaña serán coordinadas en adelante directamente desde la dirección federal, junto con las direcciones de las Federaciones.
- ◆ Desde IU vamos a impulsar una campaña específica de desobediencia civil y resistencia activa frente al monstruo de la guerra y la política cómplice con Estados Unidos y autoritaria del gobierno Aznar. <br><br>

## **Una involución democrática**

El Partido Popular se ha integrado con toda comodidad en la lógica de la mundialización desigual y en su agenda totalitaria y represiva. Las nuevas prioridades que después del 11 de septiembre han adquirido protagonismo han ofrecido un espacio para la justificación de las políticas y también de los errores.

La Huelga General y las movilizaciones contra la LOU han significado un importante desgaste y descrédito para el gobierno. Fueron, sobre todo, la expresión social de un rechazo masivo a las políticas del PP que pusieron al desnudo su íntima vinculación con el neoliberalismo, con su agenda económica y social y, sobre todo, con su agenda política.

La obsesión por una peculiar interpretación de la inseguridad ciudadana por parte del PP ha encontrado en la lucha contra el terrorismo su tema predilecto. Del mismo modo que, tras la Huelga General del 20-J, el Gobierno promovió la ley de ilegalización de partidos políticos, tras su calamitosa y oscura gestión en la catástrofe del Prestige, la propuesta respecto al cumplimiento íntegro de las penas por parte de los terroristas, ha hecho visible y opinable lo que sólo podía comentarse *sotto voce*: el PP mercadea políticamente con el dolor que causa la barbarie terrorista. Ni discusión con otros grupos ni oportunidad política ni razones reales: mera e indigna utilización de la lucha antiterrorista con fines partidarios.

Esta última batería de propuestas resulta, en especial, particularmente nefasta en todos los órdenes.

En primer lugar, porque incluye medidas dudosamente constitucionales, al menos en su formulación inicial. Se vulnera el artículo 25 (sobre la reinserción) y la igualdad de derechos entre todos los ciudadanos. Además, se intenta introducir un castigo similar a la cadena perpetua, abandonada en España desde el inicio del siglo XX y considerada como un trato inhumano y degradante.

En segundo lugar, porque la propuesta está argumentada sobre falsos supuestos. Las estadísticas demuestran que la reinserción –de acuerdo con el Código Penal del año 73- ha ofrecido resultados muy razonables y que los fracasos para el caso de los terroristas debe imputarse precisamente a la ausencia de reinserción.

En tercer lugar, porque es una reforma irreal, aun quedan en las cárceles más de 400 presos etarras que han sido condenados de acuerdo al Código Penal del año 73 y para los cuales, como todo el mundo sabe, se aplican una serie de medidas que son las que ahora se ponen en tela de juicio. Pero es que no sabemos de los efectos de las medidas recogidas en el nuevo Código Penal aprobado en el 95 y antes de esto, el gobierno se inventa una reforma que sólo se aplicará a aquellos delitos que se cometan a partir de su entrada en vigor. Hemos de presumir, entonces, que el gobierno trabaja con una hipótesis impresentable en términos políticos: la persistencia del fenómeno terrorista para el año 2040. ¿Es todo lo que se les ocurre?

En cuarto lugar, porque es una propuesta tramposa cuyo fin es operar como una cortina de humo frente a su declarada incompetencia, cuando no un comportamiento criminal, en el naufragio del *Prestige*

En quinto lugar, porque expresa una vez más la desconfianza del neoliberalismo y de los gobiernos que lo suscriben respecto a la división tradicional de poderes y a la independencia del poder judicial. El PP pretende domesticar al poder judicial, limitando sus competencias y centralizando decisiones. Se abren así nuevos espacios de discrecionalidad y arbitrariedad. La justicia no puede ser imparcial si es funcionalmente tan sensible a los humores del poder ejecutivo

Y en último lugar, porque no podemos estar de acuerdo, desde posiciones inequívocamente de izquierdas, con medidas de lucha contra el terrorismo y la inseguridad ciudadana que siempre ponen el acento en la misma sílaba: la represión, la limitación de libertades y bordear permanentemente la legalidad democrática. Este énfasis llama tanto más la atención porque hay una renuncia expresa a la posibilidad de articular propuestas de orden político que ofreciesen otros caminos. **Desde IU hemos dicho muchas veces y continuamos afirmando que la democracia puede hacer mucho más por la paz y contra el terrorismo de lo que el gobierno nos propone.**

El propio PSOE, forzado a negociar fuera del Pacto Antiterrorista, no ha tenido más remedio que matizar y volver a matizar en un ejercicio de funambulismo político con evidentes riesgos, desaprovechando de nuevo la oportunidad de defender una posición de diálogo y de unidad de las fuerzas democráticas.

El precio de esta propuesta-trampa será para el gobierno sus futuras dificultades para hacer creíbles propuestas que, desde ahora, llevaran el inconfundible aroma de la mentira y de la utilización fraudulenta de la lucha antiterrorista con fines claramente partidistas y electorales. De otra parte, las medidas sobre la pequeña delincuencia pretenden “barrer las calles” a costa del derecho a la presunción de inocencia y del carácter constitucionalmente no retroactivo de los cambios penales, y que golpearían sobre todo a las minorías excluidas y a las personas con menos recursos. Frente al incremento de la represión y a los planes de construcción de

nuevas cárceles, como propugna el Gobierno, proponemos una estrategia alternativa, basada en políticas sociales de prevención, de integración de los barrios y sectores marginados, de reinserción social, tal y como recomienda el Consejo de Europa.

Este es un episodio más de la deriva autoritaria de este gobierno y un eslabón más de la cadena que parece precipitarle hacia el descrédito social y político. No habría que deducir, no obstante, que los días del PP están contados.

### **Barrer la “pequeña” y la “mediana” delincuencia**

Si bien llama la atención el olvido de la “gran” delincuencia como, por ejemplo, las quiebras y suspensiones de pago fraudulentas que, según Informe de la Fiscalía General del Estado, han aumentado de un año para otro el 66%, algunas de las medidas anunciadas por el Partido Popular ponen en entredicho o vulneran abiertamente las bases del Estado de Derecho y nuestra propia Constitución, amén de Convenciones y Tratados Internacionales sobre derechos de los trabajadores y de las minorías. Y pueden resumirse en “Ley y orden”, es decir más cárceles, frente a justicia redistributiva y políticas sociales preventivas. En vez del Estado social, el Estado penal; del conservadurismo compasivo, el conservadurismo sin compasión.

En el caso de la inmigración, del extranjero, del “otro”, se elimina un elemento básico del Estado de Derecho como es la presunción de inocencia, se limita sustancialmente la tutela judicial –con predominio del mandato gubernativo sobre la competencia del juez- y, contra toda norma del derecho, se imponen dobles y triples penas por una misma falta o delito (expulsión + prohibición de entrada por 10 años, o cumplimiento de condena + expulsión + prohibición de entrada). Y el endurecimiento de penas para las mafias no va acompañado –ni siquiera se menciona- de medidas de protección y reparación hacia las víctimas –especialmente en el caso del secuestro para la prostitución y de la esclavización en el terreno laboral- que son castigadas con lo que para ellas es la pena mayor: la expulsión. Por otra parte, medidas como la creación de Centros de acogida o de atención social al

inmigrante es una de las también reiteradas promesas, sistemáticamente incumplidas, con consecuencias tan atroces como lo recientemente ocurrido en una comisaría de Málaga o la situación en Canarias.

## **Desplegar la precampaña hacia las elecciones del 25 de Mayo**

Lo que ha cambiado desde la Huelga General, y el fracaso en la gestión del *Prestige* ha confirmado, es la sensación de que este gobierno, con la incertidumbre añadida por la cuestión sucesoria, ya no tiene ganadas las próximas contiendas elecciones. Esta apertura del escenario, con el ruido de fondo del cambio de ciclo económico, del aumento del paro, de las desigualdades y de la exclusión, junto a la deuda del PER, es el único dato veraz desde el que aventurar hipótesis y alternativas.

Pero es un dato fundamental porque en el escenario de cambio de ciclo internacional, confrontación bélica y crisis económica, nuestras propuestas son ahora más audibles y pueden gozar de mayor crédito y legitimidad social. **Hay un espacio mayor para la recuperación política de una izquierda transformadora y alternativa.**

No es casual que, con vistas a las elecciones del 25 de mayo, el PP haya decidido atacar frontalmente a IU, porque nos considera la llave de la mayoría en muchos Ayuntamientos y en algunas Comunidades Autónomas, y la garantía para, desde posiciones y programas de izquierda, derrotar los intereses conservadores en estos ámbitos.

El PP persigue consolidar el bipartidismo y para eso molesta la presencia de una tercera fuerza de implantación estatal claramente crítica y transformadora. Pero es un empeño que busca una legitimación más amable del sistema político. Probablemente, tras nosotros correrían igual suerte otros partidos de ámbito nacional. El fin último es la americanización del sistema político y la consolidación

de una agenda que no incomode ni moleste al modelo política y económicamente dominante.

Razón de más para intensificar la precampaña electoral de IU, poniendo en primer plano la cuestión social y las movilizaciones contra la guerra, y desplegando los ejes de nuestras propuestas programáticas: el empleo estable y de calidad, la defensa de las libertades individuales y colectivas, el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, la participación democrática en el ámbito municipal y el federalismo en las Comunidades Autónomas.

## **Estancamiento económico, aumento del desempleo y descontrol en los precios: el fracaso de la política económica del PP**

La creación de empleo en nuestro país se debilita, el paro aumenta, la inflación supera las previsiones más pesimistas y crece dos veces más que la economía, y el diferencial en precios con nuestros socios comunitarios se amplía. Las interesadas previsiones macroeconómicas del gobierno se han mostrado virtuales y la economía española difícilmente crecerá por encima del 2% en 2002. El consumo privado sigue perdiendo pulso, la inversión en bienes de equipo se mantiene en tasas negativas y es difícil esperar registros positivos de nuestro sector exterior a la vista de los pobres resultados económicos de los principales países en la UE.

La política económica del gobierno del PP sigue aferrada al fundamentalismo del déficit cero, más nominal que real, que opera como coartada para que el gasto público pierda peso en nuestra economía y poder reducir así los impuestos a las rentas más elevadas y a los rendimientos del capital. Se sacrifica inversión pública y gasto social y se consolida un sistema impositivo cada vez más regresivo y con menor suficiencia.

Una política que es responsable del agravamiento de nuestros déficits sociales, del deterioro de los servicios públicos y de los insuficientes grados de capitalización de nuestra economía, y que también ha alimentado -por el aumento de las tasas y los

tributos indirectos- el descontrol en los precios. En este sentido, cabe preguntarse dónde han ido a parar la política de privatizaciones y liberalizaciones del gobierno, cuando los precios en el sector servicios rondan el 5% de crecimiento y la inflación estructural se mueve en tasas cercanas al 4%.

Los continuos alegatos a la moderación salarial por parte del gobierno han acabado por cuestionar, en boca de responsables del gobierno e incluso del Banco de España, las cláusulas de revisión salarial, interpretando interesadamente el descontrol de la inflación adjudicándoselo a los salarios. Es fácil comprobar que los salarios no están agotando los incrementos de productividad y que contribuyen de forma positiva en la formación de los precios. Sugerir que los trabajadores admitan pérdidas de poder adquisitivo se traduce en pretender que corran con el coste del fracaso del gobierno en materia de inflación y con la voracidad de parte de nuestra clase empresarial que ha aprovechado la propia moderación salarial, la ausencia de competencia o la introducción del euro, para hinchar de manera injustificada sus beneficios.

De la misma forma, es preciso destacar el incumplimiento del gobierno del mandato del Estatuto de los Trabajadores a la hora de revisar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Un año más, el aumento del SMI para 2003 se ha cifrado en un 2% (virtual objetivo de inflación) sin contemplar los parámetros que fija el Estatuto, consolidando las pérdidas de poder adquisitivo que arrastra desde hace años, ampliando su distancia con el salario medio, y sin establecer un mecanismo permanente de revisión automática que, al menos, asegure su poder de compra.

Hace un año, el gobierno del Partido Popular hablaba de aproximación al pleno empleo en nuestro país. Su verdadero proyecto no era otro que el de apostar por la precariedad laboral, la eliminación paulatina de derechos laborales y sociales, ir abaratando el despido -con la eliminación de los salarios de tramitación- y favorecer la contratación a tiempo parcial, el subempleo y la contratación eventual. El PP, con un esquema político basado en la maximización del beneficio empresarial fomentando la contratación de mano de obra barata y con bajos costes laborales, creía que iba a ser capaz de hacer crecer de forma sostenida la ocupación. Todo ello

acompañado, además, de una estrategia para producir una fuerte bajada estadística del desempleo, con modificaciones en la Encuesta de Población Activa (EPA) cuyos cambios metodológicos han hecho desaparecer de un plumazo cientos de miles de personas en paro. Tampoco ha renunciado el gobierno a manipular mediáticamente otros datos, como el registro de afiliados a la Seguridad Social, confundiendo interesadamente la afloración de empleo a efectos de este registro con creación de nuevos puestos de trabajo.

El Gobierno, en fin, pensaba que precarizando aún más el empleo y maquillando las cifras podía escenificar una realidad contraria a la que los ciudadanos padecen realmente en nuestra sociedad, donde el drama del desempleo es de forma insistente el principal problema para la mayoría de la población, según manifiestan con reiteración las últimas encuestas del CIS.

Probablemente el Gobierno tampoco contaba con que su reforma laboral iba ser contestada con una importante Huelga General, que le obligaría a modificar de forma sustantiva su decretazo inicial.

La realidad, sin embargo, se ha mostrado tozuda. Durante el año 2002 la EPA ha reflejado el menor pulso en la creación de empleo y el aumento en el número de desempleados. En el tercer trimestre, último dato publicado, la ocupación creció un 37% menos que en el trimestre anterior y en términos anuales la creación de empleo se redujo un 22%. Así, el paro en ese trimestre aumentó en 80.000 personas y en 272.000 en el último año. El paro registrado confirma esta tendencia. En diciembre de 2002 se contabilizaron 15 meses consecutivos de aumentos interanuales del desempleo y el año 2003 ha comenzado con 1.688.000 parados registrados, 113.000 parados más que un año antes, con un balance de crecimiento del desempleo comparable al del año 1993.

Las reformas propagandísticas teóricamente destinadas a rebajar las elevadísimas tasas de temporalidad tampoco dan resultado. Las empresas continúan conservando inmensas facilidades para realizar contratos eventuales y cubren actividades de carácter estable con empleos inestables, generando unos niveles de rotación, para una sola labor, que impiden un crecimiento real del empleo de calidad. Una

temporalidad, superior al 30% sobre el conjunto de trabajadores asalariados, que no solo afecta a la calidad profesional y salarial del empleo, y que por tanto perjudica a los trabajadores en su modelo de relación laboral, sino que está dañando seriamente la productividad y competitividad de nuestras empresas. Si atendemos de nuevo al registro del INEM comprobamos que en 2002 se han firmado 14.179.245 contratos, un 0,9% más que en 2001, de los cuales tan solo el 9% (9,3% en 2001) han sido de carácter indefinido. De esta forma, en 2002 la contratación indefinida se ha reducido un 1,6%. El preacuerdo alcanzado entre sindicatos y gobierno, sobre prevención de Riesgos Laborales, motivado por el paulatino incremento de los accidentes de trabajo graves y mortales, supone un avance en las propuestas sindicales para favorecer una mayor integración de la prevención en la empresa y forzar así un mayor cumplimiento de una norma que sufrirá modificaciones en el sentido de buscar una mayor implicación de las tareas ordinarias de prevención. Igualmente se plantean la posibilidad de crear la figura del delegado territorial o sectorial de seguridad, o de incrementar la plantilla de Inspectores de Trabajo, tal como desde Izquierda Unida veníamos planteando en nuestras iniciativas parlamentarias. En el texto del acuerdo se plantea la necesidad de modernización de las Mutuas, considerando una presencia real de las organizaciones sindicales. La propuesta supone un incremento de la cotización para aquellas empresas que vean crecer sus índices de siniestralidad, así como una disminución de la misma ante una reducción del número de accidentes, así como una generalización de los planes de choque que desde diversas Comunidades Autónomas se vienen desplegando, entre ellas las desarrolladas por el Gobierno Balear.

Entendiendo el acuerdo como un avance, desde IU continuamos pensando que son necesarias medidas estructurales, jurídicas y laborales, vinculadas tanto a una mayor persecución de los incumplimientos de la norma como a la articulación de una propuesta que verdaderamente apueste por una reducción real de la temporalidad y la precariedad laboral como razones fundamentales de los elevadísimos niveles de siniestralidad laboral. La lucha contra la siniestralidad sigue siendo una prioridad para nosotros.

Hasta tanto no se fomente una cultura empresarial basada en la necesidad de incrementar verdaderamente las inversiones en I+D y de mejorar la calidad del empleo, tanto en condiciones laborales como formativas y profesionales, para procurar verdaderas ganancias de productividad, nuestro modelo empresarial seguirá perdiendo capacidad competitiva y quedará obsoleto en las vetustas formas de empresas sumidas en la cultura especulativa y de negocio fácil, donde la principal prioridad no será otra que la de rebajar costes laborales: bajos salarios, abusos en las horas extras, encadenamiento ilícito de contratos precarios, abaratamiento del despido y elevados índices de siniestralidad laboral.

Claro está que, si queremos alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y social, el principal problema se encuentra en la orientación de la política fiscal del gobierno, de la política presupuestaria y del reduccionismo del teórico déficit cero. Debemos insistir en la necesidad de procurar un papel más activo del gasto público en nuestro país y potenciar los recursos necesarios para financiarlo, y utilizar sin artificios el déficit público, dentro de los requerimientos comunitarios, como instrumento para superar el estancamiento económico y el aumento del desempleo.

El Gobierno, a pesar de sus sonoros fracasos, sigue autocomplaciente, niega la realidad y se muestra incapaz de poner en marcha otras políticas que supongan un proceso real de modernización de nuestra economía basado en la creación de empleo estable y de calidad. Todo ello orientado a buscar formas de mayor y mejor redistribución de la riqueza empleando de manera democrática toda la capacidad intelectual, profesional y tecnológica que hoy alcanza nuestra sociedad.

Por último, el Gobierno continua con su pretensión de ir eliminando paulatinamente el subsidio agrario para los trabajadores de Andalucía y Extremadura. La última propuesta del Ministro de Trabajo a los sindicatos supone elevar a 60 peonadas las necesarias para acceder a la percepción del subsidio. Si el requisito de 35 peonadas acreditadas es difícil, ante la escasez de trabajo, esta nueva propuesta elimina en la práctica el derecho asistencial y supone una dificultad añadida a la posibilidad de cotización de los trabajadores eventuales del campo para la pensión futura.

Por otra parte, conviene saber que el subsidio significa unas rentas de algo más de 100€ mensuales. Resulta un sarcasmo y un insulto a los trabajadores del campo considerar que esa cantidad ha generado una cultura de la subsistencia a la que el PP nos propone poner fin.

Ante la ambigüedad de los Presidentes de ambas Comunidades Autónomas y la firmeza de UGT y CC.OO. con la amenaza de convocatoria de Huelga General en el Campo para el próximo 20 de febrero, Izquierda Unida respalda sin matices la posición sindical, exigiendo la restitución del derecho subjetivo del subsidio agrario, entre tanto se aborda un proceso de negociación que suponga una verdadera reforma del subsidio, que suponga una alternativa real al grave problema que padecen los trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura.

Pero este tema no agota los temas relacionados con el campo que siguen pendientes: la Reforma Agraria; la política de subvenciones a los grandes empresarios; el complemento de rentas al medio rural como un modo de reequilibrio territorial.

La **cuestión social** es para IU una de las prioridades políticas de precampaña.

## **La gestión del Gobierno del PP. El Estado mínimo. El modelo autoritario**

Era un accidente sin importancia, que - en palabras del ministro de Pesca - *“gracias a la acción rápida de las autoridades españolas”* no iba a convertirse en ninguna catástrofe ecológica, en ninguna amenaza para los recursos pesqueros. El ministro de Fomento afirmó que el combustible avistado en Asturias no procedía del Prestige, sino de otros barcos que, de forma desaprensiva, habían aprovechado la ocasión para verter restos de sus cisternas en el mar. Pero hoy la marea negra afecta a cientos de kilómetros del litoral gallego, las costas del Cantábrico y la costa francesa. La prohibición de faenar y recoger marisco se extiende desde Cedeira, al norte, hasta La Guardia, en la frontera con Portugal.

La economía gallega está seriamente afectada, la industria pesquera y marisquera muy dañada, y miles de personas ven peligrar su empleo y su futuro. Y,

lamentablemente, la catástrofe no ha terminado y tal vez nos encontremos ante una “marea negra continua” mientras los restos del buque sigan expulsando el fuel, ya sea lentamente, bien como consecuencia de la oxidación de los tanques del petrolero hundido.

La gestión política de la crisis ha estado muy lejos de llegar siquiera a la categoría de decente, con medio gobierno de montería o en viaje de placer, cuando el Prestige vagaba por el mar, a punto de romperse. Un comportamiento que, en plena crisis, ha causado asombro e indignación, como la inhibición del presidente de la Xunta de Galicia, una institución que fue anulada por la prepotencia del Gobierno.

El Presidente del Gobierno ha dicho que comprende y comparte el sentimiento de indignación de la multitud que se manifestó en Santiago bajo el lema “Nunca más” y peticiones de dimisión. Pero el gobierno no quiere asumir la más mínima autocrítica, la más mínima responsabilidad política en la gestión de la crisis. El gobierno se aferra al error, con un discurso autista, incapaz de reconocer sus propios errores para superarlos.

Pero, como se ha podido comprobar, la gestión de la crisis ha sido caótica. El error principal fue minusvalorar el medio ambiente enviando el buque a alta mar y convirtiendo un accidente en una catástrofe.

Durante varias semanas reinó el desconcierto y la parálisis. La carencia de planes de emergencia y de medios ha sido patética. El Ejecutivo se ha interesado más en minimizar los efectos de la catástrofe y en justificar su propia falta de previsión que en organizar una respuesta eficaz ante la marea. Lo último está siendo el intento – con el concurso inestimable de la gacetilla de extrema derecha y el Fiscal General del Estado- de criminalización de la protesta y de toda la oposición.

La política de privatizaciones - véase la ley de Puertos y Salvamento Marítimo - y desregulación aplicada por el Gobierno del PP, agravada por la obsesión del “déficit cero”, desde una concepción ideológica del “Estado mínimo”, ha llevado al desamparo y la indefensión de la ciudadanía. Porque hay servicios públicos básicos que no pueden ser debilitados o privatizados, porque son la única garantía de seguridad para los ciudadanos y para la protección del medio ambiente y de los

recursos naturales de nuestro país. El Gobierno a hecho gala del mayor desprecio hacia lo público, no ha consultado desde el principio a los científicos, y ha actuando al margen de las organizaciones sociales, en vez de fomentar su participación.

Nuestro Servicio de Salvamento Marítimo (SASEMAR) tiene menos medios hoy que en 1996. El Primer Plan de Salvamento Marítimo del Gobierno del PP (1998-2001) rebajó el presupuesto en 4.000 millones de pesetas, por lo que el nuevo Plan (2002-2005), aprobado en julio, ha elevado la dotación un 62,5%.

Ninguno de los barcos que succionan el crudo es español. Han actuado barcos franceses, holandeses, alemanes, belgas, ingleses y noruegos. Ni un solo barco español. La presencia de buques de tan distintas nacionalidades en el escenario del naufragio revela también la triste carencia de barcos de este tipo en España. ¿Cómo es posible que un pequeño país como Bélgica, con menos de 100 kilómetros de costa, tenga un buque anticontaminación, y que una península con archipiélagos como España, rodeada de agua por casi todas partes, con miles de kilómetros de costas, no tenga ninguno? Durante más de tres semanas ha faltado de todo: barcos y barcazas, grúas, barreras flotantes de altura suficiente, depósitos de almacenamiento del crudo. Faltaron alojamientos y equipamientos adecuados y suficientes para los voluntarios. No hay arneses ni cuerdas de seguridad, maquinaria y productos biológicos para limpiar las rocas resbaladizas, impregnadas de fuel.

Tampoco se alertó a tiempo a los trabajadores del peligro de tocar el fuel. Por falta de información, durante las dos primeras semanas muchos trabajadores, soldados y voluntarios actuaron sin mascarillas con filtro de carbono activo, gafas, guantes, botas y ropas de protección adecuadas.

A ello hay que añadir la falta de medidas preventivas eficaces, la ausencia de planes de acción previos, la inexistencia siquiera de un protocolo de gestión del fuel recuperado, la escasez de recursos, la falta de coordinación y la adopción de medidas deficientes, inadecuadas y extemporáneas.

La incapacidad del Gobierno ha sumido al Estado en una crisis de legitimidad y ha causado un grave daño a la imagen de las instituciones democráticas ante la opinión pública. A la izquierda, y a IU en particular, corresponde acercar las instituciones a

los ciudadanos, evitando su alejamiento y separación de la sociedad civil, estimulando el libre ejercicio de los derechos fundamentales, especialmente los derechos constitucionales de participación, de manifestación y de libre expresión.

Los medios de comunicación, los expertos y los alcaldes de la zona damnificada se han encargado de retratar la actuación de las autoridades, del Gobierno y de la Xunta de Galicia: desidia, incompetencia, negligencia, abandono, caos organizativo, descontrol, descoordinación, improvisación, impotencia.

El Gobierno ha pecado de absentismo y de autismo irresponsable, con su incapacidad de organizar la movilización unitaria del país y de sus fuerzas políticas. El presidente Aznar no se dignó a poner el pie en el lugar de la catástrofe. Tan sólo un mes y un día después del accidente acudió a la torre de control de Salvamento Marítimo en A Coruña, evitando el contacto con las personas afectadas por el desastre y con quienes luchan contra la marea en las costas.

### *Decisiones equivocadas o imprudencia temeraria*

La decisión de alejar el barco a alta mar fue un grave error. Como después se ha demostrado, fue una decisión política, sin criterio ni asesoramiento técnico alguno. El Práctico Mayor del puerto de A Coruña fue engañado sobre el calado real del buque y, de haber conocido su calado real, hubiera aceptado su entrada en puerto.

El propio presidente del Gobierno ha tenido que asumir la responsabilidad política de la decisión adoptada en solitario por el ministro de Fomento, el 14 de noviembre, descartando el acercamiento del buque a puerto, decisión esta que hubiera limitado la magnitud y el alcance de la catástrofe. En los días siguientes, el Gobierno, con dejación de autoridad, no hizo uso de las facultades de intervención que la legislación española y el Derecho Internacional le proporcionaba para obligar al capitán del Prestige a seguir las instrucciones de ruta que le habían sido ordenadas. Esta indecisión permitió que el buque emprendiera una trayectoria errática, primero al noroeste, luego al sur, agravando las consecuencias de la catástrofe.

Fue tan sólo el 5 de diciembre, 22 días después del siniestro, cuando el Vicepresidente primero del Gobierno compareció ante la Comisión Mixta Congreso

- Senado para la Unión Europea, dando de este modo la impresión que esta catástrofe no es un problema español, que se trata sobre todo de un problema europeo e internacional.

Desde un principio, el Gobierno y la Xunta han practicado una política de censura y desinformación que recurre al eufemismo para que la tormenta amaine, en un intento de minimizar la tragedia. Según ha sido denunciado por los propios trabajadores de las televisiones públicas gallegas, Televisión Española y la autonómica Televisión de Galicia, sus directivos impartieron la instrucción de no hablar de “*marea negra*”, sino de “*manchas*” y “*vertidos*”, en sintonía con las propias declaraciones del Gobierno.

### *Las movilizaciones*

Las continuas movilizaciones que se desarrollan en toda Galicia, desde la impresionante manifestación que recorrió las calles de Santiago el pasado 1º de diciembre, la mayor en la historia de Galicia, hasta los cientos de miles de personas que llenaron las calles de Vigo, Santiago, La Coruña, Ferrol y Pontevedra, convocados por la plataforma “*Nunca mais*” y apelando a la “*Humanidad sensible*” ante esta catástrofe, han venido a demostrar que la ciudadanía está ya harta y ha dicho “basta”.

La huelga de hambre que realizaron los patrones de las Cofradías de Pescadores de O Grove, Cangas de Morrazo y A Pobra do Caramiñal, merecieron todo nuestro apoyo y solidaridad.

Las movilizaciones y acciones de solidaridad que se han producido en Galicia y en el resto de España deben continuar, con la participación conjunta del movimiento ecologista, los sindicatos y los partidos políticos, con IU en la calle y con iniciativa en las instituciones, a través de mociones en los Ayuntamientos y medidas de solidaridad.

Superando la impotencia y el enfado por la escasez de medios que el Estado había puesto a su disposición, son los propios trabajadores y trabajadoras de Galicia quienes, con un esfuerzo valiente y sobrehumano, con la solidaridad de miles de

voluntarios venidos de todo el país y del extranjero, los que dando prueba de iniciativa individual y colectiva, se han movilizado contra la marea ante la total ausencia de una mínima organización estatal.

Más de 30.000 voluntari@s, procedentes de distintas Comunidades Autónomas, han trabajado ya en la costa gallega y miles de llamadas están colapsando el Centro de Coordinación, porque las autoridades no disponen de los suficientes medios de acogida y equipamiento para recibirl@s.

### *Las iniciativas institucionales y movilización de Izquierda Unida*

La Presidencia Federal de IU traslada a Esquerda Unida de Galicia todo su apoyo y solidaridad, y felicita a sus militantes por su abnegado esfuerzo para combatir la marea negra codo a codo con todo el pueblo gallego.

El Grupo parlamentario federal de IU presentó desde el primer momento un conjunto de propuestas de prevención e intervención contra este tipo de catástrofes ecológicas, en todos los ámbitos, estatal, europeo e internacional.

El 22 de noviembre, junto al BNG y el Grupo Vasco, IU pidió la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la catástrofe del Prestige. Una comisión que el PP ha rechazado en el Congreso, pero que, de forma incongruente, ha tenido que aprobar en el Parlamento gallego ante la presión ambiental.

El desastre plantea también dudas sobre quién defiende el interés público cuando se entrecruzan diversos intereses privados. También demuestra los límites de una forma de hacer política estrictamente institucional, alejada de la ciudadanía y de su entramado social. Más allá de las responsabilidades penales y financieras de los propietarios del barco, la responsabilidad política recae también en algún grado sobre los Gobiernos de los Quince estados miembros que integran el Consejo de la Unión Europea, más dispuestos a ceder a las presiones de las industrias petroleras y navieras que a garantizar la seguridad del transporte marítimo de hidrocarburos.

Sobre el Presidente Aznar recae, además, la responsabilidad política de no haber impulsado durante el semestre de la Presidencia española de la UE la adopción por el Consejo de las propuestas avanzadas por la Comisión Europea. Según dicha

propuesta, tal y como lo ha subrayado la propia comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, en su intervención del 21 de noviembre ante el Pleno del Parlamento Europeo, el Prestige hubiera sido desguazado hace 3 años.

Izquierda Unida presentó el 12 de diciembre ante la Fiscalía General del Estado una denuncia conjunta contra los ministros de Fomento y de Medio Ambiente, por presuntos delitos de prevaricación y daños contra las personas y el medio ambiente. También hemos solicitado al Defensor del Pueblo la apertura de una investigación por daños al medio ambiente.

Dar continuidad a la solidaridad y la movilización, resolver el problema de los restos hundidos del Prestige y aplicar la legislación más dura en la Unión Europea, son algunos de los objetivos pendientes.

Izquierda Unida seguirá poniendo en primer plano el debate sobre la necesidad de una política energética alternativa y la protección del medio ambiente. Para avanzar en esta estrategia, sumaremos en la sociedad las propuestas científicas, la imaginación, la voluntad y el coraje necesarios para transformar las estructuras de producción y las pautas de consumo, para fomentar el ahorro energético, para diversificar las fuentes de energía, sustituyendo progresivamente las energías fósiles, especialmente el petróleo y el carbón, por energías limpias y renovables. Porque aquí, como en cualesquiera otros aspectos de los que nos ocupamos en Izquierda Unida, seguimos convencidos de que otra política y otra sociedad son posibles.

*Madrid, 13 de enero de 2003*